

1

Inserción solicitada por la señora diputada Carrió*Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre reforma tributaria*

Distintas observaciones merece el paquete impositivo:

1 - No es equitativo, y fija una relación de poder respecto de los sectores beneficiarios de rentabilidad y ganancia, que consolida la situación del poder económico hasta aquí imperante.

2 - Toca a los sectores de menores recursos en forma indirecta por el aumento de impuestos internos e IVA y a las personas que por su relación de dependencia no escapan al impuesto a las ganancias.

En otros ámbitos y en contexto recesivo favorecerá una mayor evasión y afecta a pequeñas y medianas empresas de las economías regionales.

3 - Siguen sin ser gravadas las ganancias de capital y las rentas financieras, lo que torna absolutamente regresivo el régimen impositivo.

2

Inserción solicitada por la señora diputada Nofal*Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre reforma tributaria*

1 - Las reformas en el impuesto a las ganancias afectan y sobretasan al sector asalariado de personas físicas con mayor capacidad contributiva, pero dejan exentos de tributación los ingresos provenientes de dividendos y las ganancias de capital que constituyen las principales fuentes de renta de los segmentos de más altos ingresos. Tampoco se consideró como alternativa gravar temporariamente las ganancias extraordinarias de personas jurídicas.

2 - No hay una completa eliminación de privilegios o exenciones en materia del tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA).

3 - El aumento de impuestos internos propuesto podrá afectar negativamente la recuperación de las ventas (demanda) de los sectores productivos involucrados, y por esa vía la recuperación económica, las economías regionales y la generación de empleo. Además, subsisten inequidades inexplicables en el tratamiento propuesto de impuestos internos en bebidas alcohólicas gravando en menor medida aquellas que tengan jugo de frutas o de limón. Asimismo, el aumento de impuestos internos a ciertos productos considerados suntuarios como las alfombras, productos de tocador, etcétera; puede tener un efecto neto negligible o aun negativo en términos de aumento de la recaudación por este concepto, pudiendo resultar un estímulo al contrabando y la evasión (lo cual afectaría la recaudación en concepto de derechos de importación, IVA y ganancias), impactando negativamente al empleo en la cadena de comercialización en el mercado interno.

3

Inserción solicitada por las señoras diputadas Nofal y Carrió*Opinión de las señoras diputadas acerca de la modificación del artículo 92 de la ley 11.683, contenida en el proyecto de ley sobre reforma tributaria*

El artículo 92 del proyecto de ley en discusión adolece de graves vicios que atentan contra derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos cuya jerarquía constitucional fuera reconocida por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Ley Fundamental.

El artículo cuestionado avasalla los principios fundamentales del derecho de defensa en juicio y del debido proceso consagrados por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional toda vez que concede prerrogativas a los agentes fiscales que exceden el marco de facultades administrativas y no garantiza el debido control por parte del poder judicial. Así, también resulta violatorio del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional que afirma que: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".

En efecto, las facultades de los agentes fiscales de trabar embargos y ordenar toda clase de medidas cautelares, la falta de revisión judicial suficiente, la imposibilidad de alegar hechos o presentar pruebas en sede judicial que no fueran presentadas con anterioridad en la instancia administrativa, resultan una clara vulneración de los derechos constitucionales. En este sentido podemos señalar que diversos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional se ven asimismo violentados.

Así la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 10 que: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8.1 que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Además, en su artículo 25 afirma: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14 que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los alcances y restricciones de las facultades de los organismos administrativos en relación con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. En este sentido, en el caso Parry (C.S.J.N. 193:408) afirmó: "Que la posibilidad de que determinados organismos administrativos sean así investidos legalmente de la facultad de dictar pronunciamientos de naturaleza judicial de manera irrevisible por los tribunales ordinarios de justicia en los supuestos mencionados en los precedentes considerandos ('Fallos' 190:539, 192:483 y los allí citados), coloca a estos organismos en la necesidad elemental para el ejercicio de tal atribución de respetar los derechos y garantías constitucionales, y en particular de la no inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. En este orden de ideas, dice Willoughby (*On the Constitution*, tomo 3, página 1732) que los derechos de ninguna persona pueden ser objeto de decisión final por parte de un tribunal administrativo, sin haber notificado a aquélla de que sus referidos derechos serán o han sido objeto de examen y resolución, y sin que además se le dé oportunidad de ser oída, esto es, para presentar los hechos pertinentes y hacer los argumentos que pudieran convenirle para oponerse a la acción que puede afectar a su persona o sus intereses".

La Corte agregó: "Que resultan así, al menos con carácter de regla general, aplicables a los procedimientos seguidos ante los jueces administrativos, los principios sentados por esta Corte para las causas judiciales, porque también aquellos organismos deben ofrecer a quienes comparecen ante ellos, 'un tribunal imparcial y apto ante el cual presentar su caso'. (Ver la publicación oficial *Administrative procedure in government agencies*, página 68.)"

Asimismo, la Corte sostuvo en relación con el derecho de defensa y el debido proceso: "Que entre estos principios interesa aquí el que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio, requiere que el litigante sea oído y que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en la oportunidad y forma previstas en las leyes de procedimiento ('Fallos' 182:502, 183:296, 185:242 y los allí citados) y más especialmente el que preceptúa el artículo 18 de la Constitución Nacional es compatible con la admisión de una determinada especie de prueba, si se ha dado oportunamente noticia de la misma al recurrente y éste ha podido producir la que convenía a su derecho para desvirtuarla ('Fallos' 183:297, 187:627, 195:85 y los allí citados.)"

Por eso, en el caso Parry citado, la Corte concluyó: "Que no aparece así de lo actuado que se haya organizado el derecho de defensa que la Constitución Nacional garantiza al recurrente. El simple comparendo del mismo, dispuesto y practicado, como se ha dicho, y el subsiguiente asentamiento de sus manifestaciones, no le otorgan otra posibilidad que la de expresar su disconformidad y protesta por el procedimiento seguido, pero no puede conducir como ha sucedido ciertamente en la especie, a su absolución".

El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, así como los tratados internacionales citados, consagra la

inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos y garantiza, al mismo tiempo, el acceso al Poder Judicial, como condición necesaria para tal defensa; a fin de obtener la tutela y poner coto a exigencias tributarias injustas. Esta norma consagra la garantía constitucional de que el Estado organice los medios necesarios para que el servicio de justicia sea prestado eficazmente, con el debido respeto a las garantías procesales fundamentales.

Debemos recordar que el acceso a la justicia y la revisión satisfactoria de los actos impugnados no consiguen su finalidad si, antes de juzgarlo, se la obstaculiza, negando la posibilidad de presentar hechos y pruebas necesarios para el pleno ejercicio del derecho de defensa.

La efectividad de la tutela judicial, emergente del principio del debido proceso, cuando es requerida en función del control de la actuación de la administración pública, pone en evidencia una cuestión de gran importancia, como es la protección de la situación de los bienes jurídicos litigiosos durante la sustanciación del proceso, que es uno de los problemas que plantea el proceso establecido por el proyecto de ley cuestionado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo ha reiterado la necesidad de respetar la defensa en juicio dentro del procedimiento administrativo a través de la observación de las formas sustanciales del derecho de defensa (notificación, ser oído, defenderse mediante argumentos y prueba, etc.) sino que también ha exigido como condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo, la posibilidad de usar una vía ulterior de revisión judicial suficiente. En efecto, la Corte ha afirmado en numerosas oportunidades que si bien no se puede establecer un marco rígido en relación con el control judicial de la administración pública, es necesario un control suficiente. Más aún, la Corte al exigir el acabado y completo respeto del control judicial suficiente, no duda en calificarlo como una garantía constitucional. Al mismo tiempo, lo define como la facultad judicial de no permitir que los funcionarios administrativos actuantes disfruten de un poder discrecional, incluso hasta tautológicamente, al utilizar el término "incontrolado", y fortalece este concepto al agregar que no puede estar "sustraído a toda especie de revisión ulterior" (Conf. "Fallos" 247:646).

Se ha definido que el control judicial importa el reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios, así como la negación a los tribunales y organismos administrativos de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y el derecho controvertido.

Además, el proceso establecido por el proyecto de ley en discusión violenta el principio de la igualdad de las partes en el proceso, también consagrada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4

Inserción solicitada por la señora diputada Curletti de Wajsfeld

Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre reforma tributaria.

En la comprensión de lograr la disminución del déficit fiscal, voy a acompañar con mi voto positivo la propuesta de reforma fiscal, entendiendo que se trata de una opción posible, dentro de lo deseable.

Quisiera asimismo, dejar sentada la necesidad de políticas activas que tiendan a corregir las asimetrías inter e intrarregionales en el marco nacional de dualidad estructural histórica, proceso que se ha agudizado severamente con la política aplicada en estos últimos diez años.

Las exclusiones que a nivel de sectores se evidencian en nuestra sociedad, se replican en el espacio nacional en relación con las provincias, las cuales no participaron de beneficios de crecimiento en las variables macroeconómicas, y menos habrán de participar en un contexto de mercado ampliado.

En la concepción de tratar distinto lo que es diferente, apelo al diseño de políticas que compensen y corrijan las asimetrías intraespaciales para un crecimiento con equidad.

5

Inserción solicitada por el señor diputado Galland

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre reforma tributaria

Mi análisis sigue el esquema del proyecto, con comentarios sobre cada una de las reformas propuestas y estableciendo comparaciones con proyectos de mi autoría respecto al impuesto a las ganancias, impuestos internos, impuestos sobre bienes personales, IVA y otros relacionados con diversas medidas tendientes a lograr una disminución de la evasión y mora en el pago de las obligaciones tributarias.

TITULO I

Impuesto a las ganancias

A) Fuente

Las primeras modificaciones a los artículos 8º, 14, 15 y el incorporado a continuación de este último, se refieren a la fuente, esto es determinar cuándo una ganancia debe ser considerada realizada en el país y por lo tanto tributar en el mismo.

Se establecen normas tendientes a determinar los precios de transacciones entre sociedades locales o fideicomisos vinculados con personas físicas y jurídicas constituidas o ubicadas en el exterior.

Estas, junto a otras que comentaré más adelante, referidas a la determinación de ganancias de fuente extranjera, son de vital importancia y se debe continuar

con su estudio modificando o estableciendo nuevas normas, para evitar las maniobras de elusión que se vienen cometiendo.

B) Exenciones

1. - Se elimina la exención a las ganancias derivadas de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y demás valores emitidos, en la parte que corresponda a la Nación, provincias o municipalidades, cuando sean emitidas por entidades mixtas.

2. - Se elimina la exención a los intereses originados en operaciones de mediación en transacciones financieras entre terceros residentes en el país, que realicen las instituciones comprendidas en la ley de entidades financieras; referidos a la colocación de documentos emitidos por los propios tomadores de fondos o bien mediante la negociación de documentos de terceros que aquéllos posean en cartera.

3. - Se elimina la exención a todo otro enriquecimiento a título gratuito, manteniéndose en las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos.

El tema de las exenciones es vital para mejorar la recaudación del impuesto a las ganancias y convertirlo en más equitativo, pero como surge de las eliminaciones propuestas, la reforma no contribuirá a lograr esos objetivos.

En el proyecto propuse como principales reformas en el capítulo de exenciones, la eliminación de las mismas a las rentas financieras y ganancias de capital, que socavaban fuertemente la base tributaria del impuesto, constituyéndose en una forma de elusión generalizada.

Mediante las mismas propuse gravar el 75% de los intereses de los depósitos en cajas de ahorros y plazos fijos, los intereses de préstamos que las personas físicas y sucesiones indivisas otorgan a las empresas, las ganancias provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores.

También limitar las exenciones a las fundaciones y a las ganancias provenientes de donaciones, herencias, legados y todo otro enriquecimiento a título gratuito.

Con respecto a este tema, es necesario mencionar las palabras pronunciadas en septiembre de 1997 por el jefe de Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Vito Tanzi: "La recaudación en la Argentina de ganancias en personas y empresas es muy baja. Si hay que

hacer cambios hay que aumentar impuestos sobre ganancias. Están exentas, por ejemplo, las ganancias por intereses, dividendos y las ganancias de capital".

El reconocido especialista Enrique Reig, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a su vez expresó (diario "Clarín", 12-12-99): "La imposición a los dividendos y a las ganancias de capital de las personas son los medios que contribuirán al crecimiento de la recaudación y desde el punto de vista de la equidad mejoraría sensiblemente la distribución de la carga impositiva".

C) Ganancias no imponibles y cargas de familia

1. - Se disminuye la deducción anual en concepto de ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial, de acuerdo al siguiente detalle:

Deducción	Actual	Proyecto	Disminución (%)
Ganancia no imponible	4.800	4.020	16,25
Cónyuge	2.400	2.040	15,00
Hijo (c/u)	1.200	1.020	15,00
Deducción especial....	6.000	4.500	15,00

Considerando que las deducciones por estos conceptos y de otro tipo son muy elevadas constituyéndose en otro de los problemas de la baja recaudación en ganancias, propuse solamente la disminución de la deducción especial de \$ 6.000 a \$ 5.000.

Esta deducción especial es importante porque permite su incremento en 200% para trabajadores en relación de dependencia, cargos públicos y jubilaciones.

2. - Se establece además una escala progresiva de disminución de las deducciones anteriores de un 10% para ganancias netas de \$ 39.000 hasta \$ 65.000; de 30% desde \$ 65.000 a \$ 91.000; de 50% desde \$ 91.000 a \$ 130.000; y así sucesivamente hasta llegar a ganancias de \$ 221.000, sin deducciones.

Estas modificaciones junto a la sustitución de la escala que establece las tasas del impuesto a pagar por personas físicas y sucesiones indivisas, que disminuye un tramo e incrementa en forma progresiva las tasas, es la principal modificación dado que determina montos de impuesto a pagar muy superiores a los vigentes como se muestra en la siguiente tabla:

A C T U A L R E F O R M A

Ingreso mensual	Ingreso anual	Deduc.	Neto	Impuesto	Deduc.	Neto	Impuesto
2.000	26.000	27.600	-	-	21.600	4.400	396
2.500	32.500	27.600	4.900	294	21.600	10.900	1.026
3.000	39.000	27.600	11.400	714	21.600	17.400	1.936
4.000	52.000	27.600	24.400	2.160	19.440	32.560	4.789
5.000	65.000	27.600	37.400	4.332	19.440	45.560	7.779
6.000	78.000	27.600	50.400	6.672	15.120	62.880	11.878
8.000	104.000	27.600	76.400	12.172	10.800	93.200	20.192
10.000	130.000	27.600	102.400	18.772	10.800	119.200	28.252

Se trata de un incremento muy importante, fundamentalmente en los tramos de menores ingresos, que significa una fuerte reducción de salarios.

Si consideramos los sueldos de los agentes ocupados en el Poder Ejecutivo nacional exclusivamente, serían alrededor de 48.000 quienes deberían tributar el impuesto, significando una reducción del gasto solamente en ese tramo del 20 %. Esto sin incluir al resto que ya tributaban (207.000), que debería hacerlo en una proporción mayor.

En cuanto a los sueldos de la actividad privada, si no se efectúa un férreo control, se va a producir un intento de elusión a través de pagos no registrados, con lo cual se vería perjudicado también el sistema de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

En el mencionado proyecto que he presentado, como lo mencioné anteriormente, se reducía la deducción especial y se establecía también una escala progresiva con los mismos tramos, pero a diferencia de esta propuesta, la base es un sueldo neto de \$ 2.500 y las alícuotas menores, con lo cual se incrementaba el monto a pagar pero en porcentajes sensiblemente inferiores.

En mi opinión, este tipo de medidas, que afectan también a las clases medias bajas (un sueldo neto de \$ 2.000 no alcanza a duplicar la canasta familiar media baja de \$ 1.032,10), deberían ser acompañadas, para alcanzar cierto grado de equidad, de eliminación de exenciones a los sectores financieros como lo expresado, y de deducciones generales y especiales para cada categoría.

Además, si no se toman rápidas medidas para combatir la evasión y así incorporar a mayor cantidad de contribuyentes, se está exigiendo mayor esfuerzo a todos aquellos que ya se encuentran registrados y efectúan normalmente sus pagos.

D) Ganancias de la tercera categoría

1. - Se incluyen como ganancias de esta categoría a las originadas en actividades ilícitas.

E) Deducciones

1.- Actualmente se permite la deducción de los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que prestan cobertura médica hasta el límite del 15% de los montos deducibles como ganancia no imponible y cargas de familia.

En la reforma, el límite es sobre la ganancia neta que establezca el Poder Ejecutivo.

2.- Se incorpora una nueva deducción, consistente en los honorarios abonados por servicios de salud, hasta un límite del 40% de lo facturado, siempre que no supere el 5% de la ganancia neta.

3.- La deducción especial de la tercera categoría, por gastos de representación, disminuye del 2% al 1,5%, sobre el monto total de remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia.

En el proyecto expresé, que a pesar que las deducciones constituyen una de las características del tributo, dado que permiten obtener la ganancia neta sujeta a impuesto, muchas de ellas son excesivas y en algunos casos improcedentes, lo cual contribuye a que muchas personas físicas y sociedades puedan eludir el pago del impuesto.

Por lo tanto propuse una amplia disminución y eliminación, en comparación a lo establecido por la reforma que propone el Poder Ejecutivo.

Se limitan la deducciones en las sumas que pagan los asegurados para casos de muerte; en las donaciones a los fiscos nacionales en los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial; en la deducción de los gastos presuntos sobre la renta bruta de los inmuebles; en los aportes de los empleadores efectuados a los planes de seguros de retiro privados; en los gastos de representación y en las sumas a deducir en concepto de honorarios a directores.

Se elimina la deducción de los aportes correspondientes a planes de seguro de retiro privados.

Estimo que en el caso de las deducciones, la reforma propuesta no avanza lo suficiente para una efectiva transformación de la estructura actual del impuesto a las ganancias.

F) Ganancias de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país.

A través de las modificaciones de los artículos 119, 126, 129, 130, 133, 135, 137, 148, 168 y 169, se establecen modificaciones importantes para la determinación de las ganancias de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país.

Se proponen importantes avances en la imputación de ganancias y gastos, apareciendo en nuestra legislación como una importante figura las sociedades por acciones constituidas o ubicadas en países de baja o nula tributación, utilizadas por grandes empresas para realizar triangulaciones financieras.

TITULO II

Impuesto al Valor Agregado

A) Exenciones

1. Se grava a los folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra, revistas y publicaciones periódicas.

Quedan exentos los libros y los diarios, excepto a bienes gravados que se comercialicen junto a ellos con un precio diferenciado.

2. Se grava a los talonarios de cheques y análogos (talonarios para depósitos).

3. Se grava a los billetes para viajar en transportes públicos hasta 100 km, incluso los de entradas a plataformas o andenes.

4. Se grava a los servicios prestados por las bolsas de comercio, así como los servicios prestados por los agentes de bolsa, los agentes del mercado abierto y las sociedades administradoras de fondos comunes de inversión.

5. Se grava a los servicios de taxímetros, remises con chofer y todos los demás servicios de transportes de pasajeros terrestres urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, provincial o municipal, acuáticos o aéreos, realizados en el país, cuando el trayecto supere los 100 km.

6. Se grava a las operaciones de pase de títulos valores, acciones, divisas o moneda extranjera.

7. Se limita la exención a las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros del consejo de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones y fundaciones y de las cooperativas.

La limitación consiste en que estarán exentos siempre que se acredite la efectiva prestación de los servicios y exista una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada, en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sea compatible con las prácticas y usos del mercado.

Se trata de una limitación de carácter subjetivo que no podrá llevarse a cabo, salvo en casos muy evidentes, y donde no se hayan arbitrado los medios contables y administrativos para justificar las erogaciones. Es muy voluntarista.

B) Período fiscal de liquidación del gravamen

1. Actualmente el impuesto se liquida y abona por mes calendario sobre la base de declaración jurada, excepto para las actividades agropecuarias que pueden efectuar el pago por período anual o por año calendario.

Mediante la modificación que se propone el artículo 27, el Poder Ejecutivo nacional podrá determinar qué sujetos y actividades liquidarán e ingresarán el gravamen resultante por período fiscal anual.

Entiendo que esta modificación estará prevista para situaciones muy especiales, porque se produce una utilización de los fondos por parte del contribuyente, que puede resultar perjudicial para el fisco.

C) Tasas

1. Se establece la alícuota del 10,5% para las siguientes prestaciones, gravadas a partir de la reforma:

– Servicios de taxímetros, remises, transportes de pasajeros terrestres, acuáticos y aéreos superiores a los 100 (cien) kilómetros.

– Los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepa.

– Las ventas de revistas y publicaciones periódicas.

D) Exportadores

1. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de establecer régimen especial respecto del crédito fiscal proveniente de las compras de bienes destinados a la exportación.

Es una buena medida si se trata de la ley 24.402 del régimen de financiamiento para el pago del IVA, sobre lo cual he presentado un proyecto para su eliminación.

Las modificaciones propuestas en el impuesto al valor agregado, aunque parciales, tienden a incrementar aún más la participación de este impuesto al consumo, indirecto y regresivo, pero de fácil recaudación en apariencia, porque también aquí existe un alto grado de evasión.

Dada la situación de déficit fiscal en que se encuentra la economía, y que según el ministro son necesarias estas medidas que afectan a las clases sociales de menores ingresos, se debió apelar a una amplia generalización con alícuotas diferenciales del 10,5% para no generar las distorsiones que produce sobre todo en los medios de información gráficos, gravándose a las revistas y no a los diarios.

Además, y dado que no estoy de acuerdo en absoluto con este tipo de impuesto, debería asumirse el compromiso ante la sociedad e incluso plasmarlo tal vez en el presupuesto, de ir disminuyendo aun con alícuotas diferenciales, la incidencia del mismo, a medida que se incremente la recaudación de impuestos directos y se comiencen a vislumbrar los resultados de la lucha contra la evasión, tema prioritario pero que no debe quedar en manos de las actuales autoridades de la AFIP, ni de representantes o gerenciadore de grupos empresarios, cuyo acelerado crecimiento genera todo tipo de dudas.

En contraposición a las reformas que se proponen, he presentado dos proyectos referidos a este tipo de impuesto.

Uno consiste en la eliminación de la sobretasa del 6%, que abonan los profesionales, comerciantes, pequeñas y medianas empresas y toda persona física o jurídica que se dedique a la producción o los servicios, en las facturas de todos los servicios públicos y que se transforma en un impuesto del 27%, sobre los de por sí elevados costos de los mismos.

El otro está referido a la ventaja comparativa que tienen las empresas de servicios públicos con relación al resto de los contribuyentes de diferir el pago del IVA, a través de lo legislado en materia de nacimiento del hecho imponible, considero necesaria la urgente modificación de esta situación.

TITULO III

Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario

1. Se modifica la tasa en lo referente al límite del impuesto resultante, por la aplicación del 15% sobre operaciones de crédito y obligaciones negociables.

Actualmente ese límite es del 1,5 % sobre el monto de la deuda que genera los intereses, y la modificación lo eleva al 2,25 %, por lo tanto el contribuyente podrá deducir un monto mayor en el impuesto a las ganancias.

2. Se elimina el artículo que permitía a las entidades financieras computar contra el importe que deban rendir por las percepciones realizadas de este impuesto,

los montos retenidos e ingresados del impuesto a las ganancias correspondientes a los intereses girados a los beneficiarios del exterior.

TITULO IV

Impuesto sobre los bienes personales

1. Se modifican las normas de valuación de bienes situados en el exterior, referidos a los títulos valores que no coticen en bolsa, para los cuales se establece que deberán ser valuados por su costo incrementado, de corresponder, con los intereses devengados al 31 de diciembre de cada año o, en su caso en el importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran devengado a favor de sus titulares y que no les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año por el que se determina el impuesto.

En los casos en que los títulos valores correspondan a sociedades o constituidas en países que no apliquen un régimen de nominatividad de acciones, el valor declarado deberá ser respaldado mediante la presentación del respectivo balance patrimonial.

2. Se determina el mínimo exento en la suma de pesos ciento dos mil trescientos (\$ 102.300).

3. Se determinan dos alícuotas.

Hasta \$ 200.000, 0,50 % sobre el excedente; más de \$ 200.000, 0,75 % sobre el excedente.

En el proyecto presentado junto a otros legisladores, considerando que este impuesto directo es tal vez el de mayor elusión en niveles que resultan casi irritativos, planteo la necesidad de normas más claras para la valuación de aeronaves, yates y similares.

También propongo eliminar la exención que gozan las cuentas de capitalización de la ley 24.241 y las cuentas personales correspondientes a planes de seguro de retiro privados.

Se admite la deducción de los intereses devengados al 31 de diciembre de cada año, por las deudas hipotecarias sobre inmuebles destinados a casa-habitación.

Finalmente se establece una escala progresiva con seis tramos, y con un mínimo exento de \$ 75.000, de acuerdo al siguiente detalle:

\$		\$	%
75.000	a	150.000	0,25
150.000	a	300.000	0,50
300.000	a	500.000	0,75
500.000	a	750.000	1,00
750.000	a	1.000.000	1,25
Más de 1.000.000			1,50

Este es tal vez de todos los tributos, el que mejor se puede controlar fundamentalmente en la posesión de

bienes registrables, y evitar las cotidianas maniobras de cesiones a terceros para eludir el gravamen, entre otras.

TITULO V

Impuesto de emergencia sobre altas rentas

1. Con el título indicado, se crea un nuevo tributo para contribuyentes del impuesto a las ganancias, que en los períodos 1998 o 1999, obtuvieron y obtengan ganancias netas superiores a ciento veinte mil pesos (\$ 120.000).

El impuesto a ingresar, que no será deducible ni podrá ser computado a cuenta del impuesto a las ganancias, ni del impuesto a la ganancia mínima presunta, surgirá de aplicar la tasa del veinte por ciento (20 %), sobre el monto del impuesto a las ganancias que corresponda determinar por el período fiscal 1999.

TITULO VI

Impuestos internos

1. Se establecen modificaciones en las alícuotas vigentes, y se incorporan otros productos, de acuerdo al siguiente detalle:

Producto	Alícuota Actual %	Alícuota Propuesta %
Whisky	12	20
Cognac, Brandy, Gin Vodka, etc.	8	20
Según graduación excepto los anteriores		
1ª clase, de 10° a 29° y fracción	6	20
2ª clase, de 30° y más	8	20
Gaseosas	4	8
Agua mineral	0	4
Jugos	0	4
Telefonía celular	0	4
Champañas	0	12
Objetos suntuarios	0	20
Cervezas	4	8
Cigarrillos	60	72

Se grava a los siguientes vehículos cero kilómetro:

– Los concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares.

– Los preparados para acampar (camping).

– Motociclos y velocípedos con motor.

– Los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos precedentes.

– Las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de borda.

– Las aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para recreo o deportes.

Estarán exentos del gravamen con un precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales de hasta quince mil pesos (\$ 15.000).

Con un precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales de más de quince mil pesos (\$ 15.000) y hasta veintidós mil pesos (\$ 22.000), gravados con la alícuota de cuatro por ciento (4 %).

Con un precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, de más de veintidós mil pesos (\$ 22.000), gravados con la alícuota del ocho por ciento (8 %).

La aplicación de este impuesto casi totalmente eliminado en 1996, y que produjo enormes pérdidas de

ingresos tributarios desde esa fecha, es correcta y coincidente, salvo algunas diferencias con el proyecto que he presentado en esta Honorable Cámara.

Es correcto, porque a pesar de tratarse de un impuesto indirecto, al consumo, grava productos con externalidades negativas y otros de elevado costo que no afectan a las personas de menores ingresos.

Dadas las características de los mismos, un eventual aumento de los precios no provoca caída en el consumo, y en la medida que ello se produzca redundará en una mejora en la calidad de vida de las personas.

Dado el alto déficit fiscal, acompaño con mi voto positivo esta votación en general.